

Durante la Guerra Civil ambos bandos realizaron incautaciones de medios de comunicación social. Así, se dio el caso de que el diario *Abc* continuara en Sevilla siendo monárquico mientras en Madrid, donde estaba la casa madre, fuera reconvertido a la fuerza en republicano.

Finalizada la contienda el Gobierno decidió crear una cadena de publicaciones como servicio público. El sistema consistió en la confiscación de unas cuantas y la compra o creación de otras. Prensa y Radio del Movimiento abarcaría informativamente casi toda la geografía nacional. Llegó a poseer más de la tercera parte de los rotativos de nuestro país. Contaba con ocho veces más publicaciones que la primera empresa periodística privada, Editorial Católica.

Durante el periodo inicial hubo pugnas por su control. Se impuso el sector falangista. Con el paso de los años fue evolucionando, tras las diferencias surgidas entre distintas familias políticas, imponiéndose la línea del Movimiento. Después progresó a tono con la llegada de los tecnócratas al Gobierno, un grupo destacado de miembros del Opus Dei.

Finalmente, tras la caída de estos, se llegó a revolver contra “el espíritu del 12 de febrero” que preconizaba el presidente Carlos Arias Navarro. Fue el famoso *gironazo* publicado en *Arriba*, buque insignia de esta flota periodística, en contra del asociacionismo político. Era la lucha entre el búnker y los partidarios de cierta renovación conforme a las exigencias de los nuevos tiempos.

Sirvió al régimen que la alumbró y, con la llegada de la transición, pasó a ser objeto permanente de codicia política. El Gobierno de Adolfo Suárez democratizó el nombre, pasando a denominarse Medios de Comunicación Social del Estado. Pero tan solo se trataba de un lavado de imagen cara su ulterior enajenación. La excusa para privatizarla fue que la radio y la televisión son un servicio público y la prensa, no. Por ello se desgajó la red de emisoras, que fue incorporada a Radio Nacional de España y posteriormente a lo que ahora es el ente RTVE.

Con la democracia consolidada y en plena agonía de la cadena de diarios estatales, se dio la circunstancia de que se invirtieron los papeles en relación con la supervivencia de la misma. Partidos de izquierda y centrales sindicales, enemigos acérrimos hasta entonces de su continuidad, modificaron de postura y pasaron a defenderla a ultranza. Mientras UCD (Unión de Centro Democrático) que, desde su llegada al poder, la había utilizado descaradamente a su servicio, abogada por la desaparición. Todos giraron un ángulo de 180 grados.

Una vez acometida la transición democrática, el partido en el poder trató de mejorar a cuenta del Estado estas publicaciones, dotándolas de nuevos edificios y modernos medios técnicos, para su proyecto de privatización y adquisición de los más influyentes y rentables, mediante una turbia maniobra económica. Los centristas flanqueaban la campaña de las empresas editoras para la liquidación de la red de diarios, tras aprovecharla convenientemente en las campañas electorales.

La debacle de los *ucederos* en las de 1982 frustró sus planes de acaparamiento de la red de diarios. El PSOE, una vez en la Moncloa, pese a que se había mostrado partidario de su continuidad –así fue acordado en su XXIX Congreso– y que había impugnado el proceso enajenador, acabaría aplicando el decreto-ley de supresión aprobado por el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Se desdecía de sus iniciales propósitos de pervivencia como medios institucionales, dándoles el golletazo. El trasfondo era hacerse con su control a nivel privado, para incrementar su magno aparato de dirigismo informativo.

Primero fue el intento de formación de sociedades anónimas laborales para que los trabajadores estuvieran teóricamente al frente de los rotativos, pero bajo la participación empresarial de *El País*. La denuncia de la maniobra y oposición de aquellos para evitar la

creación de un holding periodístico en torno a dicho diario de izquierdas, en el que hubieran quedado relegados a convidados de piedra, frustró el proyecto del PSOE y de Jesús Polanco, presidente de Prisa. Después, la creación de Mundicom, empresa que, mediante sociedades formadas en las capitales en que se iban a subastar los diarios más influyentes y saneados, intentó coparlos.

Empresarios próximos al poder consiguieron unos cuantos. Así, el caso Filesa, sobre la financiación del PSOE, tuvo como protagonistas a Guillermo Galeote, Carlos Sanjuán y Carlos Navarro, máximos responsables de Prensa Sur. Adquirieron varias cabeceras en Andalucía. Pero no declararon tal actividad, pese a su condición de parlamentarios a Cortes. Tras la investigación abierta, Sanjuán llegó a manifestar que los tres eran testaferros del partido en dicha empresa, mientras que desde la sede de Ferraz negaban cualquier participación en la misma.

La politización de los medios que adquirieron supuso en algunos casos tremendos descensos en las ventas. Ocurrió con el santanderino *Alerta*. Regido por dirigentes socialistas cántabros, fue escenario de una de las huelgas más largas –cuatro meses– de la historia del periodismo en España. Un resonante conflicto en el que se prodigaron agresiones físicas, amenazas de pegar tiros, estallido de alguna bomba, contabilidades falseadas, cientos de miles de ejemplares camuflados, generoso reparto de beneficios y donación al PSOE... Escándalo que hizo que el tema de la asignación de este rotativo llegara al Congreso de los Diputados.

Los mayores perjudicados por este proceso enajenador y posterior privatización han sido los periodistas que trabajaban en esta cadena. Fue un buen banco de pruebas, una gran escuela profesional, para muchos que se iniciaban en el mundo de la información. Pero los vaivenes políticos de la última etapa hicieron que sufrieran las iras de varios dirigentes, como cuando el ministro Pio Cabanillas los calificó de residuos fascistas o el vicepresidente Fernando Abril Martorell amenazó con meterlos en los bajos del Ministerio de Agricultura.

Los que eligieron continuar al servicio de la Administración del Estado fueron condenados al más oscuro de los ostracismos. Arrinconados en gabinetes de comunicación de museos y otros centros similares, quedaron casi anulados laboralmente. Excelentes plumas que se desaprovecharon.

Un poder, cuarto o no, presente diariamente en la vida nacional, desconocido casi siempre por los lectores y oscuro las más de las veces en su entramado. Una prensa que no ha sido del Estado, sino que ha sobrevivido cautiva del Gobierno de turno. Todo un viaje desde la herencia *joseantoniana* hasta la de Pablo Iglesias, la del fundador del PSOE y UGT, no la del de Podemos.

Adoctrinada por la Falange, potenciada por el Movimiento, manipulada y después legislada su privatización por la UCD y vendida la mejor parte y liquidada el resto por el PSOE, continúa siendo objeto de polémica. Centristas y socialistas intentaron que, una vez liquidada de la Administración del Estado, prosiguiera **supeditada** a nivel privado de su órbita de poder. Quienes criticaban el dirigismo y manipulación política del régimen anterior pretendieron hacer lo mismo.

En suma, un continuismo con una falsa imagen democrática. Una historia interminable que ha discurrido por un camino sinuoso, cerrado y, sobre todo, contradictorio.

Periódicos que han pasado a depender de unos amos de la información a otros. El último capítulo de este libro esté dedicado a los dueños de la prensa. Y a las intrigas y manejos de la máquina felipista/socialista para erigirse como el más importante de todos ellos y tratar de manipular al resto. Siempre en base a que quién controla la información, tiene el poder. Al precio que sea.

Diferentes épocas en las que se ha pasado de *Franco, Caudillo de España*, de Paul Preston, al *Caudillo González*, como José Luis Gutiérrez quiso titular su libro *La ambición del César*, pero no se le autorizó. Y, por último, al *Caudillo Sánchez*, obra de la exparlamentaria socialista Rosa Díaz. Y siempre tratando de que la prensa esté bajo control político.

I. SURGIDA EN LA GUERRA

La cadena de Prensa del Movimiento tiene su origen en parte durante la Guerra Civil. La mayoría de los diarios que la formaban echaron a andar mediante el sistema de incautaciones realizadas por las tropas franquistas a lo largo de la contienda, al igual que las republicanas hacían lo mismo con las de signo contrario. Finalizada el enfrentamiento bélico se completó, a base de adquisiciones, el resto del grupo periodístico oficial.

Poco antes existieron algunas publicaciones nacionalsindicalistas, como *La conquista del Estado* (1931), *Libertad* (1931), *El Fascio* (1931), *JONS* (1933), *F.E.* (1933) y *No importa* (1936), creadas por las juntas ofensivas de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo y los falangistas de José Antonio Primo de Rivera y Julio Ruiz de Alda. La mayoría apenas si duró unos meses.

Así, de *No importa* se editaron tres números clandestinos, escritos mayormente desde la cárcel Modelo de Madrid. Y de *El Fascio* un sólo número, pues fue retirado por la autoridad y prohibida su continuidad; llevaba artículos de José Antonio, Ramiro Ledesma, Ernesto Giménez Caballero y Rafael Sánchez-Mazas.

A los dos meses de la asonada, un decreto dispuso la apropiación de bienes y patrimonio de los partidos que integraban el Frente Popular y el traspaso de su propiedad al nuevo Estado. La medida incluía al resto de las publicaciones sin adscripción partidista, pero con una significación liberal.

Desde el inicio las agrupaciones políticas que formaban el Frente Nacional prestaron gran atención a los fines propagandísticos. Tanto Falange Española como la Comunión Tradicionalista, en concordancia con sus partidos homogéneos del viejo continente, incluían en su programa una muy elaborada concepción del factor periodístico.

En octubre del 1936, azules y requetés suscribieron un acuerdo –faltaban todavía siete meses para su unificación como Falange Española Tradicionalista y de las JONS– por el que se repartían los edificios y talleres de los diarios que iban a incautar en Madrid, pues creían que la toma de la capital era inminente. «Supuesta la obligada desaparición de la prensa marxista y antinacional que se ha venido publicando en la capital de España –rezaba el texto– y en justa compensación por las incautaciones llevadas a cabo en nuestros órganos periodísticos por los partidos del Frente Popular, se hace así mismo una distribución de imprentas y talleres entre las organizaciones comparecientes, salvadas las naturales excepciones de los periódicos que deban subsistir».

Tras salvaguardar que el acuerdo había de ser aprobado por el Gobierno y la autoridad militar, la Falange se quedaría con las instalaciones y maquinaria de *El Liberal*, *Heraldo de Madrid*, *Claridad*, *El Socialista*, *Mundo Obrero*, *Espasa Calpe* y *Unión Radio*. Los carlistas se harían cargo de *Ahora*, *El Sol*, *Política* y *Radio España*.

A finales de dicho año fueron declarados ilícitos los «periódicos, folletos y toda clase de impresos y grabados pornográficos o de literatura socialista, comunista, libertaria y, en general, disolventes», obligando a sus propietarios a entregar los establecimientos a las autoridades.

Las medidas provisionales de incautación arrancaron de la aplicación de la Ley de Prensa de 1938 y fueron finalmente sancionadas dos años después por otra emanada de la Jefatura del Estado. Fue promulgada con el propósito de poner fin a lo que «reviste

la incertidumbre y la falta de consistencia de todos los estados posesorios cuando no han transcurrido las circunstancias de tiempo ni median los requisitos de titularidad necesarios para convertir el hecho posesorio en una situación de dominio».

Fue un texto legal creador de la cadena periodística del Movimiento. El artículo primero disponía que «pasarán al Patrimonio de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET-JONS, con facultades de libre disposición, las máquinas y demás material de talleres de imprenta o editoriales incautadas por el Ministerio de la Gobernación y su Dirección General de Prensa, en virtud de la orden de 10 de agosto de 1938, o intervenidos los mismos con anterioridad a dicha fecha, siempre que se trate de material perteneciente a empresas o entidades contrarias al Movimiento Nacional, aunque sean actualmente poseídas o disfrutadas en precario por entidades que no dependen del expresado Ministerio o de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda del Partido, y aquellas que aunque no hubieren sido materialmente incautadas debieron serlo en cumplimiento de la orden ministerial referida».

Ley que puso en poder de lo que más adelante se llamaría Prensa del Movimiento un elevado contingente de material de imprenta y edificios. Cabe destacar que se eximían de bastantes gravámenes fiscales a la explotación a los periódicos.

Las llamadas «fuerzas de oposición al glorioso Movimiento Nacional», ilegalizadas tras el final de la contienda e incautados sus bienes fueron: Izquierda Republicana, Confederación Nacional del Trabajo, Partido Socialista Obrero Español, Unión General de Trabajadores, Partido Comunista de España, Unión Republicana, Partido Sindicalista, Partido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasca, Ezquerra Catalana, Partido Galleguista, Sindicalistas de Pestaña, Partido Obrero de Unificación Marxista, Federación Anárquica Ibérica, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional y «cualquiera otras entidades, agrupaciones o partidos filiales de análoga significación a los expresados a juicio de la Junta Técnica del Estado».

Relación a la que después se añadirían el Partido Socialista Unificado de Cataluña, Unión Rabbassaires, Acción Catalana Republicana, Partido Catalanista Republicano, Unión Democrática de Cataluña y Estat Catalá.

Tras la guerra, al aprobarse los estatutos de FET-JONS, se creó la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda. Disponía de gran autonomía, excepto en lo relativo a ciertas facultades como la censura. En 1957 pasó a depender directamente del ministro secretario general como Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento, disponiendo de la gestión administrativa y económica de todas las unidades de producción periodísticas, radiofónicas y de publicaciones del partido.

Jesús Álvarez Fueyo sucedió al frente del aparato propagandístico a Antonio Correa Veglisson. Unos años después se puso en funcionamiento el Consejo de Gerencia, del que formaban parte como vocales de libre designación Fernando Herrero Tejedor, Manuel Fraga Iribarne, Pascual Martín Pérez, Luis Gómez de Aranda, Fernando Pérez Sevilla y Antonio María de Oriol y Urquijo...